

Informe Anual sobre la Trata de Personas 2011 HONDURAS (NIVEL 2)

Honduras es principalmente un país de fuente y tránsito para hombres, mujeres y niños sometidos a la trata sexual y al trabajo forzoso. Usualmente las víctimas hondureñas son reclutadas de las áreas rurales con promesas de trabajo y luego son sometidas a la prostitución forzada en áreas urbanas y turísticas, como lo son Tegucigalpa, San Pedro Sula e Islas de la Bahía. Las mujeres y niños hondureños son encontrados en condiciones de trata en Guatemala, El Salvador, México, Belice y los Estados Unidos. En menor grado, mujeres y niñas de países vecinos, incluyendo Guatemala y México, están sujetas a la esclavitud sexual en Honduras. Además de los informes anecdóticos sobre incidentes ocurridos en Islas de la Bahía, las autoridades hondureñas identificaron turismo sexual infantil en La Ceiba, San Pedro Sula y Siguatepeque durante este año. También han habido reportes de familias rurales que han vendido a sus hijos(as) quienes al final terminan siendo sometidos a trabajos forzados y a la explotación sexual comercial en las áreas urbanas. Las ONGs han reportado incidentes relacionados con el trabajo forzado en Honduras en las áreas de agricultura y servicio doméstico. Los hombres, mujeres y niños(as) hondureños también son sometidos a trabajos forzados en otros países, particularmente en Guatemala, México y los Estados Unidos; algunos de estos migrantes son explotados en su ruta hacia y/o en los Estados Unidos. Funcionarios, ONGs y medios de comunicación reportaron que ha habido un incremento de casos en los cuales hombres jóvenes en áreas urbanas fueron coaccionados y amenazados por miembros de maras a fin de que estos traficaran droga.

El Gobierno de Honduras no cumple en su totalidad con los estándares mínimos para la eliminación de la trata; sin embargo, está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo. Dentro de estos esfuerzos se incluyen sostenidos, modestos esfuerzos en la aplicación de la ley contra los traficantes de menores para el sexo, creación de un amplio proyecto de ley contra la trata, y el lanzamiento de una línea telefónica directa contra la trata. Sin embargo, los servicios gubernamentales para las víctimas de trata siguen siendo limitados, las leyes han fallado en prohibir la trata con fines de trabajo forzado, y las autoridades no han empleado métodos proactivos para identificar a las víctimas de trata entre las poblaciones vulnerables.

Recomendaciones para Honduras: Aprobar una ley inclusiva contra la trata que prohíba el trabajo forzoso; incrementar los esfuerzos en investigar y procesar todos los delitos relacionados con la trata, incluyendo los delitos de trabajo forzado y prostitución forzada de víctimas adultas, condenar y sentenciar a los responsables de trata; asegurarse que hayan servicios especiales y albergues disponibles para las víctimas de la trata a través del aumento de fondos, ya sea para las entidades gubernamentales o las organizaciones de la sociedad civil; incrementar los recursos y el personal dedicado a la policía y la unidad de la fiscalía; desarrollar procedimientos formales para identificar a las víctimas de entre las poblaciones vulnerables; aumentar el entrenamiento de identificación y asistencia de las víctimas, incluyendo a las víctimas de trabajo forzado, de los funcionarios locales de inmigración, de aplicación de la ley y judiciales en la identificación de la víctima y su asistencia, incluyendo a las víctimas de trabajo

forzado; optimizar la planificación del gobierno y los mecanismos de coordinación tal vez a través de la aprobación de un plan nacional o incrementar la acción del comité; y continuar creando conciencia acerca de todas las formas de trata de personas.

ENJUICIAMIENTO

El Gobierno de Honduras ha mantenido esfuerzos para investigar y castigar los delitos de trata sexual que involucran a menores durante el periodo de reporte, aunque no realizaron serios y sostenidos esfuerzos contra los delitos de trata que incluyen el trabajo forzado o la prostitución forzada de adultos. Honduras prohíbe la prostitución forzada a través de circunstancias agravadas contenidas en el artículo 149 del Código Penal, promulgado en 2006, pero no hace prohibición específica de trabajo forzado. Para los delitos de trata sexual, el artículo 149 prescribe penalidades que oscilan de los 12 a los 19.5 años de cárcel. Tales castigos corresponden con las prescritas para otros delitos graves, tales como la violación. Si bien los funcionarios informaron sobre la redacción de una nueva y completa ley contra la trata, el proyecto de ley no fue introducido al Congreso durante el periodo de reporte. El Gobierno mantuvo una unidad de aplicación de la ley dedicada a investigar la trata y contrabando humano; esta unidad consiste de 10 oficiales de investigación, todos basados en la capital. La oficina de la Fiscal Especial de la Niñez maneja todos los casos concernientes con la trata, incluso aquellos que involucran a adultos; sin embargo, la efectividad de esta unidad se ha visto afectado por la limitación en el personal y los fondos.

Existen 106 investigaciones pendientes sobre denuncias de trata de personas durante el periodo de reporte. Las autoridades procesaron siete casos de trata sexual infantil, así como un caso de trabajo forzoso usando la ley de explotación financiera. El Gobierno obtuvo tres condenas, dando a los delincuentes procesados sentencias que van desde 10 a 19.5 años de prisión. En comparación, las autoridades enjuiciaron 26 casos de trata y obtuvieron cinco condenas durante el año anterior. La falta de prohibiciones específicas contra el trabajo forzado continúa siendo un impedimento significativo en los esfuerzos de la aplicación de la ley. El Gobierno no reportó ninguna investigación, procesamiento, condena o sentencia de funcionarios públicos por complicidad en la trata de personas. No hubo denuncias confirmadas de trata relacionadas con corrupción durante el año. Las autoridades hondureñas colaboraron con funcionarios de Guatemala y México en dos investigaciones durante el periodo de reporte. ONGs y organizaciones internacionales continuaron proporcionando la mayor parte de entrenamientos contra la trata de personas disponibles para los funcionarios del gobierno.

PROTECCIÓN

El Gobierno de Honduras proporcionó los servicios mínimos a las víctimas de la trata durante el año, pero remitió a las víctimas a las organizaciones no gubernamentales para recibir servicios de atención. Aún no hay procedimientos formales empleados por los funcionarios para identificar a las víctimas de trata entre la poblaciones vulnerables, como lo son las mujeres y niñas en la prostitución. El Gobierno no financió albergues o servicios dedicados a la atención de las víctimas de trata. Las víctimas de trata infantil pudieron recibir atención médica y

psicológica limitada en los tres centros de atención para niños en riesgo social del Gobierno, de los cuales uno fue abierto en San Pedro Sula en el mes de diciembre de 2010. Los funcionarios no poseen un registro del número de víctimas de trata infantil que recibieron servicios en estos centros. Los funcionarios hondureños se coordinan generalmente con las ONGs para remitir a las víctimas de trata para que puedan recibir atención. Una de las ONGs asociadas proveyó la mayor parte de las atenciones a las víctimas infantiles y no recibió fondos directos del Gobierno. Aunque las ONGs han brindado servicios a adultos víctimas de la trata en Honduras, incluyendo la repatriación de víctimas hondureñas, el financiamiento por parte del gobierno para servicios de atención a las víctimas adultas fue prácticamente inexistente. El único refugio proporcionado por el Gobierno accesible a las víctimas de trata adultas masculinas es el centro de detención del migrante, el cual no es apropiado para las víctimas de trata.

El financiamiento del Gobierno a servicios de atención a las víctimas se limitaron en gran medida a la prestación de servicios médicos, psicológicos y dentales básicos para algunas víctimas en los centros de salud gubernamentales; estos servicios están disponibles para todos los ciudadanos hondureños. Una red de ONGs reportó la identificación de más de 300 víctimas durante el periodo de reporte. Los diplomáticos hondureños en el exterior reportaron ayudar a víctimas hondureñas en otros países. Las víctimas fueron alentadas a colaborar con la investigación y enjuiciamiento de los traficantes, y algunos lo hicieron durante el periodo de reporte. Algunas víctimas de la trata rehusaron a cooperar, sin embargo, debido a la desconfianza en el sistema judicial, particularmente en la habilidad de asegurar su seguridad personal, porque faltan los servicios de protección de víctimas. No hubo reportes de víctimas identificadas de ser penalizadas por actos ilegales cometidos como resultado de haber sido víctimas de la trata. El Gobierno no reportó de forma sistemática el ofrecer a las víctimas extranjeras alternativas legales para su traslado a países donde podrían enfrentar dificultades o castigos, aunque las autoridades reportaron que no tienen conocimiento de casos de víctimas de trata que fueran deportadas.

PREVENCIÓN

El Gobierno ha aumentado sus esfuerzos en prevenir la trata de personas durante el periodo de reporte a través de asociaciones con organizaciones de la sociedad civil. La Comisión Inter-Institucional de la Explotación Sexual Comercial y Trata de Niños que está compuesta por agencias del Gobierno, ONGs y organizaciones internacionales, sirve como un cuerpo de coordinación interagencial, se reunió ocho veces durante el año. La mayoría de los esfuerzos de la comisión se centró en la prostitución infantil. La transparencia en las medidas por parte del Gobierno contra la trata fue limitada; mientras las autoridades compartían las estadísticas sobre los esfuerzos contra la trata a petición, el Gobierno no reportó públicamente sobre la efectividad de sus propios esfuerzos durante el periodo de reporte. En septiembre de 2010, el Gobierno lanzó una línea nacional directa para que las víctimas de trata puedan obtener información y asistencia, con el apoyo de una organización internacional, la comunidad de ONGs y un gobierno extranjero; esta línea directa es administrada por la unidad contra la trata de la policía. Con el apoyo de una organización internacional, los funcionarios acogieron un grupo de trabajo bilateral con funcionarios colombianos sobre las mejores prácticas en la lucha

contra la trata. Las autoridades continuaron asociándose con el consejo privado del turismo, el cual trabaja con los hoteles y otros negocios turísticos para promover un código de conducta en el que se prohíbe la explotación sexual comercial infantil; 182 hoteles y complejos turísticos adicionales firmaron durante el periodo en reporte para hacer un total de 416 negocios participantes. Las autoridades reportaron haber multado y cerrado dos hoteles por un periodo de una semana por haber permitido la explotación sexual infantil, asimismo se multaron siete bares y clubes nocturnos por permitir la explotación sexual infantil. El Gobierno investigó tres turistas sexuales infantiles de los Estados Unidos y uno de Honduras durante 2010 pero no reportaron enjuiciamientos o condenas por turismo sexual infantil. Las autoridades reportaron haber entrenado a casi 2,000 niños vulnerables en cómo reconocer y reportar los delitos de trata y cómo no convertirse en víctima. El Gobierno no reportó esfuerzos por reducir la demanda de trabajo forzado.